
COMPATIBILIDAD ENTRE LAS ECONOMÍAS ORIENTADAS AL MERCADO Y EL PROCESO DEMOCRÁTICO: EL CASO DE MÉXICO EN LOS OCHENTA Y NOVENTA

*Gabriel Mendoza Pichardo**

Introducción

México ha sido presentado en diversos foros internacionales como un modelo en la aplicación de las políticas de reestructuración y modernización promovidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En los últimos años también se ha insistido en que la reforma económica de México, medida por varios indicadores monetarios y financieros convencionales ha resultado un éxito.

Los análisis de organismos financieros y económicos internacionales y del propio gobierno de México han tendido a soslayar el costo social y político del programa de ajuste económico. Cuando lo incluyen, México emerge nuevamente como un modelo en el que la "concertación social" ha permitido la reforma económica, con la carga del ajuste repartida equitativamente y sin rupturas sociales de importancia.

Para comprender los efectos globales de las políticas económicas neoliberales aplicadas en México y en muchas otras partes del mundo no es suficiente con analizar el cumplimiento de las metas explícitas de estos experimentos económicos, sino que también deben incorporarse sus

* Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.

implicaciones sociales y políticas (especialmente en lo que atañe a las libertades y derechos de los individuos y los pueblos).

Intentaremos mostrar que, en el caso de México, la aplicación del enfoque neoliberal ha implicado un fuerte autoritarismo por parte del Estado, un deterioro significativo de los niveles de vida y la supresión de derechos sociales y políticos. Al revisar sus metas explícitas y algunas dificultades económicas acumuladas no puede afirmarse que el modelo mexicano haya sido un proceso ordenado y exitoso, sin dificultad alguna.

El neoliberalismo mexicano¹

La política económica actual comenzó en 1982, al calor de la crisis de la deuda externa. Como condición para las sucesivas renegociaciones de esa deuda, el gobierno mexicano suscribió tres convenios con el Fondo Monetario Internacional en 1982, 1986 y 1989, de tres años de duración cada uno, que lo obligaban a seguir una política de "ajuste estructural".

Alrededor de 1986, se profundizó la presencia del Banco Mundial, con apoyos crediticios también atados a programas de ajuste estructural similares a los del FMI.² Estos programas buscan liberar el mercado, asignando a la inversión privada el papel de motor del crecimiento, y orientar a economías como la de México a la exportación de manufacturas.

Los componentes del ajuste estructural son la reducción del tamaño del Estado, incluida la privatización de empresas públicas, la apertura comercial, la eliminación de regulaciones y reglamentos a las actividades privadas, la desaparición de subsidios gubernamentales y de controles de precios, la apertura a la inversión extranjera (eliminando límites de participación en las empresas nacionales y requisitos de desempeño). También, no siempre de manera explícita, los programas implican un

¹ Para un seguimiento detallado de la evolución de la política económica y de sus resultados puede verse *Organización de cooperación y desarrollo económicos*. México, Estudios Económicos de la OCDE, julio de 1992; para una visión convencional e información estadística actualizada sobre México, James M. Cypher, *Estado y capital en México. Política de desarrollo desde 1940*, México, Siglo XXI Editores, 1992 (Este trabajo apareció originalmente en inglés con el título *State and capital in Mexico. Development policy since 1940*), para una visión crítica.

² James M. Cypher, *op. cit.*, capítulo 6.

ajuste en el mercado de trabajo, a través de la eliminación o debilitamiento de los sindicatos.

Modelo en la aplicación de la política de ajuste estructural, se ha dicho que en una década, México tuvo un avance sorprendente en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, en la superación de ineficiencias estructurales y en la solución del endeudamiento externo excesivo.³

En 1990, la última renegociación de la deuda externa en el marco del menú de opciones del Plan Brady (reducción del principal, reducción de la tasa de interés u otorgamiento de nuevos créditos) permitió aliviar una transferencia neta anual de recursos al exterior equivalente a 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, pues el gobierno mexicano había mantenido celosamente el servicio de la deuda externa.

La reducción en el monto de la deuda o de las tasas de interés con los bancos comerciales, no sólo implicó la firma de un convenio previo con el FMI, sino que también obligó al gobierno mexicano a constituir dos fondos con títulos del Tesoro estadounidense para garantizar el pago del principal a treinta años y para asegurar el pago de intereses durante 18 meses.⁴

La renegociación, junto con otras medidas de ajuste estructural abrió los mercados voluntarios de capital internacional (cerrados desde 1982), y se constituyó en la señal para que fluyera en montos importantes el capital extranjero, fundamentalmente en inversión de portafolio (acciones y títulos de empresas privadas y del propio gobierno).

Los 10 años de política de ajuste estructural arrojan una tasa de crecimiento promedio muy baja. El PIB se estancó virtualmente entre 1982 y 1988, y el crecimiento iniciado en 1989 ha tendido a desacelerarse (el PIB creció 4.4 por ciento en 1990, 3.6 por ciento en 1991 y 2.6 por ciento en 1992 y se espera un menor crecimiento para 1993). La inversión fija se desplomó reduciéndose como porcentaje del PIB (de 26.4 a 16.8 por ciento) entre 1981 y 1988 y después ha crecido vigorosamente a tasas de 8 a 10 por ciento anual. Los años críticos de contracción severa del PIB fueron 1983 y 1986.

³ José Córdoba, "Diez lecciones de la reforma económica en México", *Nexos*, Núm. 158, México, febrero de 1991, pp. 31-48.

⁴ Un análisis de esa renegociación puede verse en Alejandro Álvarez Béjar y Gabriel Mendoza Pichardo, *México 1988-1991 ¿Un ajuste económico exitoso?*, México, UNAM, Facultad de Economía, 1991, pp. 42-43.

La corrección de los desequilibrios macroeconómicos se resume en la disminución de la tasa de inflación anual de 100 por ciento en 1982 y 160 por ciento en 1987 a 12 por ciento en 1992. En la estabilización del tipo de cambio (que actualmente se deprecia con respecto al dólar en .004 nuevos pesos, siendo la tasa de cambio de 3.20 nuevos pesos por dólar). Y en la obtención de un pequeño superávit fiscal en 1992 (después de que en 1982 y en 1987 el gobierno tuvo un déficit equivalente a 17 por ciento del PIB), debido a la austeridad presupuestal, a la reducción significativa del servicio de la deuda pública interna y externa y a la privatización de empresas públicas.

La estrategia de exportación de manufacturas llevó a una modificación de la estructura de las exportaciones. Se redujo la dependencia de las exportaciones petroleras (alrededor de 75 por ciento del total en 1982), siendo ahora las exportaciones manufactureras el principal componente con un alto crecimiento anual.

Los problemas estructurales subyacentes

El reto más evidente que enfrenta la economía mexicana hoy es el del financiamiento constante de un déficit en la balanza comercial de 20 mil millones de dólares anuales. Sumando el déficit de servicios, se ha calculado que en los próximos años México requerirá entradas de capital del orden de los 22 mil millones de dólares anuales.

Dado que las entradas de capital han sido en inversión de portafolio, México depende ahora de la evolución de su bolsa de valores y de la tasa de interés de los bonos gubernamentales para asegurar el imprescindible flujo de capitales que demanda. La baja de la bolsa de valores y el simultáneo aumento de rendimiento de bonos del gobierno en los primeros dos meses de 1993, mostraron que México depende de la clasificación que den a los valores mexicanos y al país las calificadoras internacionales especializadas. El otro punto de alerta es que el endeudamiento del sector privado en el exterior también ha venido creciendo aceleradamente.

El déficit comercial creciente aparece en 1989 y está ligado con la recuperación del crecimiento, con la apertura comercial, profunda y unilateral, que se inició en 1985-86 cuando México entró al GATT, y con la apreciación lenta, pero sistemática, del tipo de cambio, uno de los precios ancla del programa antiinflacionario heterodoxo iniciado a fines

de 1987. Las importaciones de bienes de consumo, casi inexistentes antes de la apertura aumentaron muy rápido, afectando ramas nacionales como la textil y la de producción de artículos electrodomésticos.

Los componentes principales de las importaciones siguen siendo la importación maquinaria y equipo y de insumos para la producción, es decir, son importaciones estructuralmente necesarias para el funcionamiento de la economía mexicana. En este sentido, los 10 años de ajuste estructural han acentuado más que modificado el patrón básico de operación de la economía mexicana de los setenta (ocultado por el boom petrolero de 1978-81). Las empresas y ramas de la producción dominantes en la fase avanzada de la sustitución de importaciones, son las que siguen dominando el sector productivo mexicano.⁵

El auge exportador de manufacturas se ha basado en unas cuantas grandes empresas transnacionales y nacionales, únicas beneficiarias de la política de promoción de exportaciones manufactureras, que han operado en base a un comercio intraindustrial e intraempresa. Destaca el sector automotriz en el cual México se ha especializado en la producción de motores, autopartes y el ensamble de algunos modelos de automóviles para la exportación. Son empresas con un apetito importador superior a sus exportaciones. Adicionalmente, un efecto del ajuste estructural es la desaparición de programas de apoyo a las industrias básicas de bienes de capital, lo que ha devenido en una mayor desarticulación del aparato productivo mexicano.

Otro problema estructural relacionado con el sector industrial es el del lento crecimiento de la productividad global, lo que sigue implicando un bajo nivel de competitividad internacional. La política de promoción de exportaciones, basada en bajos salarios industriales, apoyos crediticios, exenciones impositivas y la subvaluación del tipo de cambio entre 1986-1990, no provocó un crecimiento rápido de la productividad, pues se buscó aprovechar ventajas estáticas y no ventajas dinámicas. La productividad del trabajo creció 1.4 por ciento por año en los ochenta contra 3.5 por ciento de su tendencia histórica.⁶

⁵ Hemos tomado ésta y otras ideas de este apartado de Jaime Ros, "Mexico in the 1990s: a new economic miracle? Some notes on economic and policy legacy of the 1980s", Draft, June 1992.

⁶ Ver Ros, *op. cit.*, también Alejandro Álvarez Béjar y Gabriel Mendoza Pichardo, "Mexico: neoliberal disaster zone" in Sinclair, Jim (Editor). *Crossing the line*, New star Books, Vancouver, 1992, pp. 26-37.

Dos daños estructurales graves del programa de ajuste fueron la caída de la inversión pública y privada y la disminución de la tasa de ahorro interna. La caída de la inversión bruta fue tan aguda entre 1982 y 1988 que su monto no fue suficiente para reponer el acervo de capital desgastado. Esa caída explica la aparente incompatibilidad de tasas de inversión del 10 por ciento con incrementos del producto de 3 por ciento en 1989-1992. En 1992 la inversión en México está recuperando los niveles de principios de los ochenta. Es una inversión de reposición, más que de crecimiento.

La caída del ahorro interno ha devenido en una necesidad creciente de ahorro externo (vía nueva deuda o inversión), con todas las dificultades que ya que se han señalado. Junto al enorme esfuerzo del gobierno para mantener el servicio de la deuda externa, la caída de los ingresos de la mayoría de la población implicó un incremento de la propensión al consumo, mientras que la cancelación y deterioro de la calidad de los programas sociales del gobierno ha obligado a mayores gastos privados para obtenerlos.⁷

Una parte de las crecientes exportaciones de México se debió, no a la ampliación de la planta industrial sino a que, ante la contracción del mercado interno de México, las empresas tendieron a reorientar su producción hacia el exterior, aprovechando las ventajas estáticas que se les presentaban. Al mismo tiempo, creció rápidamente la producción de las maquiladoras en la frontera norte de México, basadas en bajos salarios, ausencia de sindicatos, reglas laxas de seguridad y de protección al ambiente y tarifas públicas e impuestos especiales.

El crecimiento de las exportaciones manufactureras, el incremento de la producción maquiladora (en 1990 había 2007 maquiladoras que ocupaban a más de 460 mil trabajadores) y la continua migración a los Estados Unidos (estimada en 100 mil trabajadores al año) no han podido absorber a una fuerza de trabajo que crece en 1 millón de personas por año.⁸

Aunque las autoridades mexicanas han publicitado tasas de desempleo abierto reducidas (2.7 por ciento en 1991, según la metodología de

⁷ Para una revisión detallada del movimiento de la inversión durante 1982-1988 ver James M. Cypher, *op. cit.* Ros, *op. cit.* presenta como hipótesis las razones por las que cayó el ahorro privado, ver más adelante el apartado 3.

⁸ Ver Alejandro Álvarez Béjar y Gabriel Mendoza Pichardo. "Mexico: neoliberal disaster zone", *op. cit.* y Organización de cooperación y desarrollo económicos, *op. cit.*

la Organización Internacional del Trabajo), lo cierto es que México enfrenta fuertes problemas de desempleo y subempleo encubierto en actividades informales. El país no cuenta con ningún sistema de apoyo a los trabajadores desempleados, por lo que el desempleo pleno es un lujo.

Finalmente, el mejoramiento de las finanzas gubernamentales, por la renegociación de la deuda y la reducción del gasto corriente y de inversión, tuvo un ingrediente importante en la privatización de empresas públicas. El proceso de privatización y liquidación de empresas estatales comenzó desde 1982. Fue hasta 1986, con el cierre de la empresa acerera Fundidora de Monterrey, a la que seguirían las ventas de las aerolíneas estatales Aeroméxico y Mexicana de Aviación, que comenzó a tocarse el núcleo central del amplio sector de empresas estatales de México (1 155 entidades en 1983).

La parte más jugosa de obtención de recursos de una sola vez por concepto de privatizaciones se ubica en los últimos cuatro años, cuando el gobierno se desprendió de los bancos comerciales (estatizados en 1982 al calor de la crisis financiera), de Teléfonos de México (la empresa telefónica nacional), de empresas mineras cupríferas (Mexicana de Cobre y Compañía Minera de Cananea) y del conjunto del sector acerero propiedad del Estado (Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas y Altos Hornos de México).

La fuente de estos recursos, obtenidos por una sola vez, está prácticamente agotada. Quedan las grandes empresas de los sectores: petrolero, eléctrico y ferroviario, que históricamente han sido de propiedad estatal. Pero aún estas empresas han estado sujetas ya a procesos de privatización velados (subcontratación, entrega para explotación privada de áreas completas, etcétera).⁹

Así, una suma importante de los recursos que permitió balancear las finanzas públicas está por desaparecer. El gobierno dijo que usaría los recursos de la privatización para atender las necesidades sociales. Sin embargo, esos recursos fueron utilizados principalmente para amortizar y cancelar parte de la deuda interna y externa del sector público, por lo que no tendrán efectos importantes de largo plazo sobre la economía

⁹ Ver Alejandro Álvarez Béjar, "Reestructuración financiera y productiva: raíces y resultados de la privatización en México", México, UNAM, Facultad de Economía, enero de 1993 (mimeo).

mexicana, más allá de que han ampliado el margen de maniobra temporal del gobierno.

En julio de 1992, la OCDE señaló como riesgos de la economía mexicana la sobrevaluación constante del peso que puede afectar la competitividad de exportaciones, la disminución del ahorro interno que puede afectar a la inversión, el aumento del déficit comercial por un retraso o debilitamiento de la recuperación de la economía estadounidense y la falta de ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que debilitaría la confianza de la inversión extranjera e implicaría que se necesite un financiamiento externo sustancial.¹⁰

En síntesis, los problemas estructurales presentados aquí, permiten afirmar que después de 10 años de política de ajuste estructural la economía mexicana emerge más débil,¹¹ sin visos de que se puedan obtener las tasas de crecimiento económico anual de 7 por ciento logradas en los años sesenta. En 1989 el gobierno se fijó las metas de concluir 1994 con una tasa de crecimiento sexenal promedio de 4 por ciento y una tasa de 6 por ciento en 1994. Es evidente ahora que esas metas son inalcanzables, mientras que el espectro de una nueva crisis financiera comienza a rondar.

Saldos sociales del neoliberalismo mexicano

Aunque no cambió el patrón estructural de funcionamiento de la economía mexicana, el ajuste estructural generó una fuerte redistribución del ingreso hacia los estratos más altos de la población y un empeoramiento significativo de los niveles de vida y de trabajo para la gran mayoría de los habitantes del país.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática arrojan que en 1984 (cuando ya había iniciado el ajuste estructural) el 50 por ciento de los hogares con ingresos más bajos obtenían el 20.8 por ciento de los ingresos totales, mientras que el 10 por ciento superior se quedaba con el 32.8 por ciento. En 1989, el 50 por ciento más bajo obtenía el 18.8 por ciento del ingreso, mientras que el 10 por ciento más alto acumulaba ya el 37.9 por ciento. De hecho, los primeros nueve

¹⁰ Organización de cooperación y desarrollo económicos, *op. cit.*

¹¹ *Cfr. Ros, op. cit.*

estratos pierden participación relativa entre 1984 y 1989, siendo el último estrato el único que tiene una ganancia de participación de 5.1 puntos porcentuales.

La distribución del ingreso entre los factores de la producción también muestra el cambio agudo de la distribución del ingreso en México durante los años de ajuste estructural. En 1980, la participación de los asalariados en el PIB era de 36 por ciento, una década después, en 1990 esa participación había caído a sólo un 24.7 por ciento. Al mismo tiempo, la parte de las ganancias brutas se elevó de 55.1 por ciento a 65.7 por ciento, para los mismos años.¹²

El cambio en la distribución del ingreso a favor de los estratos más altos de la sociedad y de los poseedores de capital se debe básicamente a que durante el ajuste estructural, los grupos privados exportadores y el capital financiero nacional, que se convirtió en la fuente de financiamiento del gobierno, tuvieron condiciones extraordinarias para hacer ganancias. La tasa de interés se manejó a partir de 1987 como la variable libre de la estabilización antinflacionaria, lo que arrojó altas tasas de interés reales.

La población asalariada ha estado sujeta a una política salarial que ha fijado sistemáticamente los incrementos de salarios por debajo del aumento de los precios. Desde diciembre de 1987, el salario se convirtió oficialmente en un precio-áncla del programa antinflacionario. El aumento anual del salario mínimo en enero de 1993, fue de 7 por ciento, el monto de la inflación esperada por el gobierno en 1993, mientras que la inflación de 1992 fue de 12 por ciento.

Entre 1980 y 1990 el salario mínimo perdió un 55 por ciento de su poder adquisitivo. En ese mismo periodo, el promedio de los salarios contractuales de jurisdicción federal disminuyó en un 32 por ciento. Parte del saneamiento de las finanzas públicas corrió a cargo de los trabajadores al servicio del Estado, que además de soportar un creciente desempleo, en promedio perdieron un 41 por ciento de poder adquisitivo entre 1980 y 1989.¹³

En enero del presente año, Carlos Salinas y Pedro Aspe (titular del Ejecutivo y secretario de Hacienda, respectivamente) declararon que el

¹² Ver cuadros 27 y D. en *Organización de cooperación y desarrollo económicos*, op. cit.

¹³ Ver cuadros 1 y 2 en Alejandro Alvarez Béjar y Gabriel Mendoza Pichardo, *México 1988-1991 ¿un ajuste económico exitoso?*, op. cit.

alto desempleo y la caída de los salarios en México eran parte de los mitos geniales que se presentaban como si fueran verdades, explicando con datos oficiales que la situación en los dos frentes estaba mejorando.

Del debate a que dieron lugar esas declaraciones puede concluirse que la tasa de desempleo oficial no refleja la realidad del desempleo en México, ni compagina con otras estadísticas de mediación indirecta del desempleo, que los salarios mínimos han seguido su ruta de caída durante 1989-1993, y que, si bien en algunos sectores industriales comienza a presentarse una mejoría de las remuneraciones reales promedio, ello se debe básicamente al aumento de los sueldos de empleados y de ejecutivos, mientras que los salarios de los obreros están estancados, y siguen teniendo un nivel real menor al de principios de la década de los ochenta.

La caída del gasto público en la década de los ochenta tuvo un efecto fuerte sobre los niveles de vida de la población. Al final de esa década casi un 50 por ciento del gasto público se destinaba al servicio de la deuda pública. Al mismo tiempo se adoptó como primera recomendación que "la prioridad fundamental debe ser el saneamiento de las finanzas públicas". La aplicación de esa receta llevó a recortes generalizados, a la reducción de la inversión y a la caída de los salarios de los trabajadores públicos.¹⁴

Para 1989, el gasto público destinado a programas había caído en un 40 por ciento respecto a su punto máximo de 1981. No hubo un sólo sector de gasto que no sufriera una reducción. En todos ellos, la parte más afectada fue el renglón de inversión. Aquí interesa resaltar que el gasto social, en educación, salud y vivienda, se redujo en un 30 por ciento real entre 1981 y 1989. La caída del gasto público social afectó profundamente los sistemas educativo y de salud de México y a la creación y mantenimiento de la infraestructura.

Importa remarcar la magnitud de la caída porque, con la disminución del servicio de la deuda se habla de una recuperación del gasto público en programas. Esa recuperación ha sido asimétrica en relación a la caída del servicio de la deuda, pues se mantiene la prioridad del saneamiento de las finanzas públicas, se ha iniciado de un piso reducido y ha perdido fuerza. A fines de 1992, el gobierno estimaba los crecimientos reales del

¹⁴ José Córdoba, "Diez lecciones de la reforma económica en México", *op. cit.*

gasto programable de 1991, 1992 y 1993 en 6.5, 5.0 y 4.1 por ciento respectivamente.¹⁵

Autoritarismo y lucha contra el programa de ajuste

Los costos del ajuste estructural no estuvieron repartidos. La mayoría de la población cargó con el ajuste durante el periodo 1982-1993. La pregunta que viene a la mente es ¿cuáles fueron las condiciones que dieron a los gobernantes de México el margen de maniobra social para aplicar un programa económico que devastó las condiciones de vida de manera tan profunda?

El proceso de aplicación del ajuste estructural ha sido antidemocrático y antipopular y no ha estado libre de la oposición de los afectados a lo largo y ancho del país en muy diversas formas. Durante el ajuste estructural se han vivido conflictos sindicales, campesinos, vecinales, estudiantiles y electorales.

Momentos clave fueron las huelgas obreras de junio de 1983, la organización ciudadana que rebasó la ineptitud de las autoridades ante los terremotos de la ciudad de México en septiembre de 1985, la protesta de los estudiantes de la Universidad Nacional en contra del aumento de cuotas en 1986-1987, las elecciones presidenciales de julio de 1988 y las movilizaciones magisteriales por aumento salarial de 1990.

La estructura de poder corporativo de México se formó en los años treinta. Desde entonces, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobierna el país. En los ochenta, las estructuras sindicales oficiales se convirtieron en el punto contradictorio de la política de ajuste estructural: por un lado son el apoyo del régimen y el elemento de contención de las demandas obreras, por otro son obstáculo en el proyecto que busca privatizar empresas públicas, eliminar contratos colectivos de trabajo y reducir los salarios de los trabajadores.¹⁶

¹⁵ Presidencia de la República. *Criterios generales de política económica. Para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes a 1991*. México, noviembre de 1992.

¹⁶ Seguimos aquí las ideas desarrolladas por Asa Cristina Laurell, "Democracy in Mexico: will the first be the last?", en *New Left Review*, number 194, july/august 1992, pp. 33-53. También puede verse Alejandro Álvarez Béjar y Gabriel Mendoza Pichardo. México 1988-91 ¿un ajuste económico exitoso?, *op. cit.*

El régimen corporativo mexicano ha venido erosionándose desde los años sesenta. En 1988, el descontento popular contra el proyecto de ajuste estructural se manifestó como una revuelta electoral generalizada. Las elecciones presidenciales de 1988 se tornaron en una lucha de masas en busca de democracia y un proyecto nacional nuevo. Mientras el candidato del Frente Democrático Nacional Cuauhtémoc Cárdenas enarbolaba la bandera de la soberanía nacional, la democracia y la justicia social, Carlos Salinas de Gortari, elegido candidato del PRI por el presidente en turno, era el representante de la continuidad del ajuste estructural.

Cárdenas ganó las elecciones presidenciales de julio de 1988. La victoria le fue arrebatada por el fraude que el PRI y el gobierno instrumentaron. No sirvieron cuatro meses de movilizaciones de masas para impedir que Salinas de Gortari asumiera, en la ilegitimidad, la presidencia en diciembre de 1988.

A pesar de su condición, Salinas de Gortari profundizó y aceleró el ajuste estructural. Pero para hecerlo tuvo que recurrir a acciones autoritarias y antidemocráticas. En 1989, Salinas introdujo una reforma electoral que mantiene la organización de las elecciones en manos del gobierno y su partido (el PRI), que restringe la formación de coaliciones como el FDN de Cárdenas en 1988, que introdujo una "cláusula de gobernabilidad" por la cual el partido minoritario mayor (35 por ciento de los votos o más) obtiene la mayoría absoluta en el Congreso, y que mandó la elaboración de un nuevo padrón electoral favorable al PRI.

Prácticamente en todas las elecciones realizadas en México después de 1988 el fraude ha sido una constante, especialmente para frenar al Partido de la Revolución Democrática, el nuevo partido de Cárdenas.

En varios Estados ha habido oposición fuerte al fraude y Salinas se ha visto obligado a quitar gobernadores y presidentes municipales priístas que supuestamente habían ganado las elecciones, es el caso de San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán. Para evitar la llegada de opositores al régimen se ha buscado que esas remociones se den en forma que Salinas pueda nombrar funcionarios interinos más o menos permanentes.

La violencia política y contra los sindicatos no ha faltado en estos años. El PRD tiene registrados más de 100 militantes asesinados. Han sido desalojados por la fuerza pública militantes del PRD y de otros partidos que protestaban por el fraude en oficinas públicas, ha habido provocaciones armadas en los mítines de la oposición. También se

incrementó la violencia contra periodistas, académicos y trabajadores de los derechos humanos.

En los movimientos sindicales como los de la Ford Motors Company, la cervecería Modelo, trabajadores ferrocarrileros y otros se ha recurrido a golpeadores. También han sido utilizados el ejército y la policía, se ha encarcelado a los dirigentes sindicales y a sus asesores legales. Desde 1982, una constante de la actuación de las autoridades del trabajo de México ha sido la violación de la legislación laboral y la actuación parcial en contra de direcciones y sindicatos democráticos.

Así, el proyecto de ajuste estructural ha podido funcionar gracias al autoritarismo y a la cancelación de la democracia. Pero al mismo tiempo que se le ha venido terminando el margen de maniobra en el terreno estrictamente económico, en el político han comenzado a tensarse las fuerzas alrededor de la sucesión presidencial de 1994, en donde Cuauhtémoc Cárdenas volverá a contender. Hasta ahora no parece posible que la plataforma neoliberal del PRI pueda ganar limpiamente unas elecciones en México.

Tomando en cuenta que una condición *sine qua non* para el avance de México es el establecimiento de un verdadero sistema electoral democrático y representativo, el desastre social causado por el neoliberalismo deja dos alternativas al electorado: "entre un régimen políticamente autoritario, moralmente corrupto, socialmente excluyente y económicamente ineficiente, incapaz de afrontar los desafíos de la modernización o un sistema de vida democrático, que liquide la simulación y encauce las potencialidades de toda la nación".¹⁷

¹⁷ "¿Qué es la Revolución Democrática?", documento de trabajo para el Programa de la Revolución Democrática presentado por Porfirio Muñoz Ledo, *Corre la Voz*, México, Núm. 158, 25 de febrero-3 de marzo de 1993.